

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Declaración pública

Índice AI: ASA 13/001/2007 (Público)

Servicio de noticias: 004/07

9 de enero de 2007

<http://web.amnesty.org/library/Index/ESLASA130012007>

Bangladesh: Los derechos humanos amenazados por la creciente tensión en el período preelectoral

Amnistía Internacional siente honda preocupación por el hecho de que el respeto por los derechos humanos en Bangladesh se vea cada vez más amenazado por la intensificación de la crisis política que se vive en el país. Mientras la huelga a escala nacional convocada por la alianza de antiguos partidos de oposición liderada por la Liga Awami continúa y en medio de denuncias de uso de fuerza excesiva por parte de agentes policiales y militares, se han recibido informes según los cuales más de 200 personas han resultado lesionadas, algunas de gravedad, durante los enfrentamientos que se vienen produciendo entre las fuerzas policiales y del ejército y los manifestantes desde el 7 de enero.

El 3 de enero, la alianza de oposición liderada por la Liga Awami anunció el boicot de las elecciones al Parlamento programadas para el 22 de enero. La alianza acusó al actual gobierno provisional –que supervisa la organización y la manera en que se llevan a cabo las próximas elecciones– de favorecer al Partido Nacionalista de Bangladesh, partido mayoritario de la anterior coalición gobernante. La alianza de oposición ha pedido la dimisión del jefe del gobierno provisional, una reforma de las listas de votantes existentes y el aplazamiento de la fecha de las elecciones. Según los informes recibidos, la Liga Awami tiene previsto organizar una huelga el día de las elecciones.

Por su parte, el Partido Nacionalista de Bangladesh ha expresado confianza en los gobiernos provisionales y desea que las elecciones tengan lugar según lo previsto, incluso sin la participación de los partidos que las están boicoteando.

La división política entre los grandes partidos políticos sigue aumentando tras fracasar el intento de acordar una solución que ponga fin a sus diferencias. Se teme una escalada de los enfrentamientos violentos entre simpatizantes de partidos rivales, y que ello dé lugar a un aumento del número de víctimas mortales, de heridos graves y de bienes destruidos.

Según la información disponible, decenas de personas han muerto y cientos han resultado heridas en los enfrentamientos violentos de los dos últimos meses entre la anterior coalición gobernante y activistas de la oposición. Los informes recibidos apuntan a que los autores de gran parte de los actos violentos son activistas del Partido Nacionalista de Bangladesh y de la Liga Awami. Sin embargo, ninguno de los partidos ha condenado la violencia utilizada por sus propios miembros, pese a haber acusado reiteradamente a sus adversarios de ella.

El gobierno provisional anunció que, de conformidad con la Constitución, las elecciones deberían celebrarse en el plazo de 90 días desde el 28 de octubre de 2006, fecha en que se disolvió el Parlamento anterior. El gobierno provisional ha ordenado una intervención militar y ha ampliado los poderes de arresto y detención del ejército para garantizar que las urnas permanezcan abiertas a los votantes el 22 de enero.

A Amnistía Internacional le preocupa que las salvaguardias que garantizan el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares en su respuesta a acciones emprendidas por miembros de la alianza de oposición sean, en el contexto actual, poco efectivas. En incidentes en los que, según parece, se ha hecho uso excesivo e innecesario de la fuerza, agentes de la policía y del ejército han empleado palos para golpear a activistas de la oposición que, según informes, en su mayoría participaban pacíficamente en manifestaciones callejeras. En determinados incidentes los activistas de la oposición también han utilizado palos y, según la información recibida, han arrojado ladrillos y bombas incendiarias contra la policía. Ésta ha respondido con gas lacrimógeno y balas de goma.

Amnistía Internacional reconoce la responsabilidad del gobierno a la hora de garantizar el orden público, pero insta a las fuerzas de seguridad a que respeten los derechos humanos y utilicen la fuerza sólo de manera proporcionada y cuando sea necesaria. A la organización también le preocupa que las fuerzas militares puedan utilizar los poderes ampliados de arresto y detención otorgados al ejército, como de hecho ya ha ocurrido en el pasado, para cometer violaciones de derechos humanos graves. La impunidad para cometer violaciones de derechos humanos en el contexto de preservar el orden público es un serio motivo de preocupación en el país.

A pesar de la presunta implicación de las fuerzas militares en el uso de fuerza excesiva, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura durante despliegues anteriores, no se sabe de ningún soldado que haya sido procesado o llevado ante la justicia. A Amnistía Internacional le sigue preocupando que sucesivos gobiernos parezcan garantizar el disfrute de impunidad por parte de las fuerzas militares. Por ejemplo, según informes, a finales de 2002 más de 40 hombres murieron a consecuencia de las torturas sufridas tras ser detenidos por el ejército. En lugar de investigarse las muertes y de llevar a los autores ante la justicia, el gobierno concedió inmunidad procesal a los miembros de las fuerzas militares.

En la atmósfera de tensión política actual, Amnistía Internacional cree que es imprescindible la colaboración de todos los partidos políticos y del gobierno provisional a la hora de garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas, cualquiera que sea su ideología política.

Amnistía Internacional insta al gobierno provisional a que declare de forma clara y urgente que cualquier miembro de las fuerzas policiales y militares será considerado personalmente responsable de sus acciones u omisiones. El gobierno también ha de garantizar que no se ofrezca impunidad bajo ninguna circunstancia a miembros de las fuerzas armadas o de la policía por violaciones de derechos humanos cometidas durante su actual despliegue.

A Amnistía Internacional le preocupa enormemente que el derecho a participar en la vida política esté siendo minado por actos de violencia, entre ellos violaciones de derechos humanos graves. Insta a dirigentes de todos los partidos políticos a que condenen categóricamente dicha violencia, a que se investiguen todas y cada una de las denuncias de participación de sus miembros en actos de violencia, y a que ayuden a garantizar que los responsables son juzgados en juicios con las debidas garantías.